

sociedad

El Gobierno revisará con los rectores la aplicación de Bolonia

Garmendia reunirá en unos días a los responsables de las cinco universidades más afectadas • El Ejecutivo hará una declaración en defensa de la reforma

SUSANA PÉREZ DE PABLOS
Madrid

El Gobierno empezará a actuar en defensa de Bolonia y ha accedido a revisar las cuestiones que no estén funcionando bien. La demanda de ayuda de los rectores de las cinco universidades más afectadas por las revueltas estudiantiles *antibolonia* ha surtido efecto. Se traducirá en dos reuniones y presumiblemente dos declaraciones públicas sobre el tema. Además, el Ejecutivo "está abierto" a la propuesta de cambios en la puesta en marcha de la reforma de Bolonia, tales como la eliminación del exceso de documentación que pide a los centros la agencia nacional de evaluación (Aneca) para aprobar las nuevas titulaciones o la revisión de los equipos de evaluación que las realizan. Así lo anunció ayer a EL PAÍS el secretario de Estado de Universidades, Marius Rubiralta.

El denominado proceso de Bolonia consiste en la homologación de los títulos en toda la UE para crear un espacio universitario común y facilitar así la movilidad de alumnos y profesores.

A la reunión con los cinco rectores acudirán también Rubiralta y el director general de Universidades, Felipe Pétriz. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, mantendrá un encuentro en los próximos días con los rectores de las cinco universidades más afectadas (Autónoma de Barcelona, Barcelona, Complutense, Sevilla y Valencia) para que la pongan al día de la situación. El día 4 se ha convocado además una sesión extraordinaria

Habrá un encuentro extraordinario del Consejo de Universidades

ria de Consejo de Universidades para abordar esta cuestión.

Rubiralta también se comprometió a que, aparte de la declaración que presumiblemente hagan los miembros de ese consejo (los rectores de las 76 universidades públicas y privadas y seis representantes del Gobierno) el día 4, el Gobierno realice, por su parte, una manifestación pública en defensa de todo el proceso de Bolonia, poniendo en claro todos los aspectos controvertidos.

En este aumento de implicación del Ejecutivo también ha influido la petición del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Ángel Gabilondo, a la ministra de que se convocará una reunión con urgencia. La CRUE mandó una carta de "solidaridad con las universidades que están sufriendo alteraciones de la vida



Decenas de alumnos ocuparon ayer la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. / EFE

Movilizados con los sindicatos

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

Todos a una. Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas y los sindicatos comparecieron ayer juntos para protestar contra el recorte presupuestario de más de 223 millones de euros que el Gobierno de Esperanza Aguirre les ha aplicado en los últimos meses. Eligieron el mismo escenario, un mensaje similar y, por el momento, dos formas de reivindicar sus peticiones.

Los rectores exigen una reunión urgente con la presidenta de la Comunidad de Madrid para fijar un calendario de pagos de la deuda ante "un hecho tan relevante como la crisis", en palabras del rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa. Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF convocan a los trabajadores a echarse a la calle el 10 de diciembre contra la "marginación de la universidad pública". Los rectores, de momento, ni confirman ni desmienten si van a protestar tras las

académica en sus campus", en la que manifestaba "la necesidad de una toma de posición conjunta del sistema universitario".

La situación seguía agravándose ayer en algunos centros. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, cerca de 600 estudiantes seguían durmiendo en pasillos y aulas de seis facultades. Y

pancartas. Pero todos —excepto Javier Uceda, de la Universidad Politécnica, que excusó su ausencia porque estaba en el concejo de gobierno, aunque le representó un vicerrector— estuvieron ayer presentes en la lectura del manifiesto de los sindicatos que llama a las movilizaciones.

El rector de la Autónoma de Madrid y presidente de los rectores españoles, Ángel Gabilondo, explicó que los máximos responsables de las universidades "coinciden con los valores y planteamientos de los sindicatos en este tema". "Confluimos en la defensa de la universidad pública, cada uno desde su lugar. Vamos a esperar a la reunión con la presidenta de la Comunidad, tras la cual decidiremos qué vamos a hacer, las iniciativas que debamos tomar", explicó.

"Son movilizaciones de los trabajadores y no vamos a poner a los rectores en esa tesitura, pero si vienen, estupendo", señaló Javier López, secretario de CC OO Madrid.

Lo más urgente para los

rectores es fijar un calendario para pagar a sus proveedores. La deuda regional asciende a 223,6 millones, según sus estimaciones. La Comunidad de Madrid, que tacha esa cifra de desproporcionada, sólo admite que debe los 25 millones que no abonó en septiembre y que pagará "a finales del presente año o inicios del 2009", según un portavoz de la Consejería de Educación. El pago de las inversiones para infraestructuras —las universidades denuncian que les adeudan 72,6 millones acumulados desde junio— "se está negociando en un nuevo calendario", añade. Tanto el presupuesto de 2008 como el de 2009, que ha descendido un 4,3%, se acordaron en un convenio con cinco años de vigencia (2007-2011) y que, para el año que viene, preveía 143 millones más de lo que van a recibir. Los sindicatos reclaman una financiación "suficiente y sostenida" de las universidades para garantizar "la calidad y la eficiencia exigible a todo servicio público".

cidir si acatan o rechazan definitivamente el proceso de Bolonia. Y en Valencia, los encierros se extendían anoche por siete centros de la Universidad de Valencia: Historia, Filosofía, Filología, Medicina y Psicología.

Con información de Ignacio Zafra (Valencia) y Ferran Balsells (Barcelona).

Castilla y León recurre la sentencia de retirada del crucifijo

L. CANTALAPIEDRA, Valladolid

La sentencia que obliga al colegio público vallisoletano Macías Picavea a retirar los símbolos religiosos de sus instalaciones —tal y como pidió la Asociación Cultural Escuela Laica— será recurrida por la Junta de Castilla y León al considerar que "va contra la decisión de un órgano de gobierno" como es el consejo escolar del centro. Así lo anunció ayer el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, que insistió en un argumento que ha tumbado ya la justicia en cuatro ocasiones. El consejo escolar (formado por profesores y padres), sostienen los tribunales, no puede decidir sobre cuestiones que afectan a derechos fundamentales.

Alguien tendría que explicarnos, dijo el consejero de la Presidencia, la diferencia "entre que un crucifijo colgado en una pared vulnere los derechos fundamentales y no así el que aparece en la mesa donde los ministros y el presidente del Gobierno central juraron sus cargos". Para recalcar sus afirmaciones, De Santiago mostró fotografías del momento en el que Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, juraron en presencia de un crucifijo.

Autonomía del consejo

Desde que en el año 2000 la Junta de Castilla y León asumiese las competencias en Educación, dijo el portavoz de la junta, "ni hemos puesto ni quitado ningún símbolo religioso porque es una competencia del consejo escolar". De Santiago volvió a insistir en la autonomía de este órgano para tomar la decisión final sobre la retirada de símbolos religiosos.

El portavoz de la Junta de Castilla y León aseguró que el gobierno regional "nunca ha vulnerado la Constitución española". Para él, la Junta "nunca ha sido tímida a la hora de defenderla". "No compartimos la sentencia y por eso la recurrimos", dijo, aunque admitió que acatan la sentencia.

El portavoz de la Asociación Cultural Escuela Laica, Fernando Pastor —padre de una niña de nueve años escolarizada en el colegio público Macías Picavea—, aseguró ayer que no se quedará de brazos cruzados. "Continuaré hasta el final planteando los recursos necesarios en los tribunales para evitar que se repitan estas situaciones", dijo.